

**AL RESPECTO DE LA DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD
JURÍDICA, MEDIOS DE APOYO Y SALVAGUARDIAS
PARA SU EJERCICIO EN ARAGÓN**

***ON THE DETERMINATION OF LEGAL CAPACITY, MEANS OF
SUPPORT AND SAFEGUARDS FOR ITS EXERCISE IN ARAGON***

M^a CRISTINA CHÁRLEZ ARÁN

Abogada

Doctora en Derecho

SUMARIO

I. BREVE INTRODUCCIÓN SOBRE LA LEY 8/2021 DE 2 DE JUNIO POR LA QUE SE REFORMA LA LEGISLACIÓN CIVIL Y PROCESAL PARA AL APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL EJERCICIO DE SU CAPACIDAD JURÍDICA. II. RELACIÓN CON EL CÓDIGO DE DERECHO FORAL DE ARAGÓN. III. REVISIÓN DE LAS MEDIDAS YA ADOPTADAS.

**I. BREVE INTRODUCCIÓN SOBRE LA LEY 8/2021 DE 2 DE JUNIO
POR LA QUE SE REFORMA LA LEGISLACIÓN CIVIL Y PROCESAL
PARA AL APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EN EL EJERCICIO DE SU CAPACIDAD JURÍDICA**

La Ley 8/2021 de 2 de junio indicada en el título entró en vigor a los tres meses de la publicación en el BOE y por tanto el 03/09/2021¹, dicha Ley como se

¹ Ley 8/2021 de 2 de junio por la que se reforma la legislación civil y procesal para al apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica Publicado en: «BOE» núm. 132, de 03/06/2021. Entrada en vigor: 03/09/2021 Departamento: Jefatura del Estado Referencia: BOE-A-2021-9233 Permalink ELI: <https://www.boe.es/eli/es/l/2021/06/02/8/con>

ha expuesto ya en publicaciones anteriores se encuentra fundamentada —según se indica en la Exposición de Motivos y resumen aquí— en el respeto a la dignidad de la persona, en la tutela de sus derechos fundamentales y en el respeto a la libre voluntad de la persona con discapacidad, así como en los principios de necesidad y proporcionalidad de las medidas de apoyo que, en su caso, pueda necesitar esa persona para el ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás.

Continúa la Exposición de Motivos sentando las bases del nuevo sistema centrándose en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad, de todo ello informa toda la norma y se extrapola a través de las demás modificaciones legales al resto de la legislación civil y la procesal. No se trata, pues, de un mero cambio de terminología que relegue los términos tradicionales de «incapacidad» e «incapacitación» por otros más precisos y respetuosos, sino de un nuevo y más acertado enfoque de la realidad, que advierta que las personas con discapacidad son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones, derecho que ha de ser respetado; se trata, por tanto, de una cuestión de derechos humanos desarrollada sobre la realidad de que muchas limitaciones, vinculadas tradicionalmente a la discapacidad no han procedido de las personas afectadas por ella, sino de su entorno: barreras físicas, comunicacionales, cognitivas, actitudinales y jurídicas que han cercenado sus derechos y la posibilidad de su ejercicio.

Tras este tiempo de aplicación de la indicada Ley, veremos alguna cuestión sobre su tramitación y aplicación en la práctica de los tribunales y en concreto en la comunidad de Aragón con Derecho foral propio.

II. RELACIÓN CON EL CÓDIGO DE DERECHO FORAL DE ARAGÓN

En el CDFA² como sabemos se encuentran reguladas las relaciones tutelares en su Título III, el cual consta de disposiciones generales y de capítulos concretos dedicados a: Tutela, Curatela, Defensor Judicial y Guarda de Hecho.

La Comisión de Derecho Civil de Aragón³ se encuentra trabajando para la modificación y adaptación del Código Foral a la legislación general, y por tanto dado que todavía no se ha modificado, en la práctica, los tribunales en Aragón, para la tramitación de un proceso de discapacidad, aunque aplican la normativa

² Código de Derecho Foral de Aragón: Real Decreto Legislativo 1/2021 de 2 de marzo del Gobierno de Aragón por el que se aprueba con el Título de Código de Derecho Foral de Aragón, el texto refundido de las Leyes Civiles Aragonesas. Publicado en: «BOA» núm. 67, de 29/03/2011. Entrada en vigor: 23/04/2011 Departamento: Comunidad Autónoma de Aragón Referencia: BOA-d-2011-90007

³ Decreto 86/2022, de 15 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil. BOA 24/06/2022

aragonesa⁴, se deja constancia expresa de la norma general civil, y por tanto ante un proceso judicial se realizan las siguientes alegaciones:

En lo relativo a la regulación legal, se ampara en el instrumento de Ratificación de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad (Nueva York el 13 de diciembre de 2.006 con entrada en vigor en España el día 3 de mayo de 2008) y en especial su Art. 12, ya que conforme a lo dispuesto al Art. 96.º de la Constitución, los Tratados Internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, forman parte del Ordenamiento Interno.

En orden a los principios del proceso, la tramitación y la sentencia que en su día se dicte, deberán adecuarse a los principios contenidos en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, y en todo caso, vendrán dirigidos a conseguir el establecimiento de los medios de apoyo, así como de las salvaguardias, adecuados y efectivos para el ejercicio de la capacidad jurídica, tanto en la esfera personal como patrimonial, de la persona discapaz a la que afecta el presente procedimiento, y en los términos previstos en el Art. 12 de la Convención.

Finalmente, en cuanto al objeto del proceso, se deberá determinar la capacidad jurídica, medios de apoyo y las salvaguardias adecuadas y efectivas para su ejercicio de aquellos que se encuentran en los supuestos del Art. 200 del Código Civil en relación con el 199 del mismo, y artículos 34 a 45 (Capítulo II, Título I, Libro I) del Código Foral de Aragón.

III. REVISIÓN DE LAS MEDIDAS YA ADOPTADAS

Retomando la Ley 8/2021, expone asimismo la indicada Exposición de Motivos de la Ley, en el apartado III que: *Todas las medidas de apoyo adoptadas judicialmente serán revisadas periódicamente en un plazo máximo de tres años o, en casos excepcionales, de hasta seis. En todo caso, pueden ser revisadas ante cualquier cambio en la situación de la persona que pueda requerir su modificación.*

Y por ello, en el propio articulado de la Ley, este mandato aparece reflejado, tal como se expresa en el apartado sobre las disposiciones generales de la curatela⁵:

⁴ Artículo 1 CDFA. Fuentes jurídicas. (...) 2. *El Derecho civil general del Estado se aplicará como supletorio solo en defecto de normas aragonesas y de acuerdo con los principios que las informan.*

⁵ CAPÍTULO IV: De la curatela: Sección 1.ª Disposiciones generales: Artículo 268.: *Las medidas tomadas por la autoridad judicial en el procedimiento de provisión de apoyos serán proporcionadas a las necesidades de la persona que las precise, respetarán siempre la máxima autonomía de esta en el ejercicio de su capacidad jurídica y atenderán en todo caso a su voluntad, deseos y preferencias.; Las medidas de apoyo adoptadas judicialmente serán revisadas periódicamente en un plazo máximo de tres años. No obstante, la autoridad judicial podrá, de manera excepcional y motivada, en el procedimiento de provisión o, en su caso, de modificación de apoyos, establecer un plazo de revisión superior que no podrá exceder de seis años.; Sin perjuicio de lo anterior, las medidas de apoyo*

Artículo 268. (...). *Las medidas de apoyo adoptadas judicialmente serán revisadas periódicamente en un plazo máximo de tres años. No obstante, la autoridad judicial podrá, de manera excepcional y motivada, en el procedimiento de provisión o, en su caso, de modificación de apoyos, establecer un plazo de revisión superior que no podrá exceder de seis años. (...)*

En cuanto a régimen transitorio, debo exponer Disposición transitoria segunda⁶.

(...) *Las medidas derivadas de las declaraciones de prodigalidad adoptadas de acuerdo con la legislación anterior continuarán vigentes hasta que se produzca la revisión prevista en la disposición transitoria quinta. Hasta ese momento, los curadores de los declarados pródigos continuarán ejerciendo sus cargos de conformidad con la legislación anterior.*

Y por tanto nos tenemos que referir y exponer la Disposición transitoria quinta⁷, que se refiere en concreto a la revisión de las medidas ya acordadas:

Las personas con capacidad modificada judicialmente, (...) podrán solicitar en cualquier momento de la autoridad judicial la revisión de las medidas que se hubiesen establecido con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, para adaptarlas a esta. (...)

adoptadas judicialmente se revisarán, en todo caso, ante cualquier cambio en la situación de la persona que pueda requerir una modificación de dichas medidas.

⁶ Disposición transitoria segunda. Situación de tutores, curadores, defensores judiciales y guardadores de hecho. Situación de la patria potestad prorrogada o rehabilitada. Situación de las declaraciones de prodigalidad.

Los tutores, curadores, con excepción de los curadores de los declarados pródigos, y defensores judiciales nombrados bajo el régimen de la legislación anterior ejercerán su cargo conforme a las disposiciones de esta Ley a partir de su entrada en vigor. A los tutores de las personas con discapacidad se les aplicarán las normas establecidas para los curadores representativos, a los curadores de los emancipados cuyos progenitores hubieran fallecido o estuvieran impedidos para el ejercicio de la asistencia prevenida por la ley y de los menores que hubieran obtenido el beneficio de la mayor edad se les aplicarán las normas establecidas para el defensor judicial del menor.

Quienes vinieran actuando como guardadores de hecho sujetarán su actuación a las disposiciones de esta Ley.

Quienes ostenten la patria potestad prorrogada o rehabilitada continuarán ejerciéndola hasta que se produzca la revisión a la que se refiere la disposición transitoria quinta.

Las medidas derivadas de las declaraciones de prodigalidad adoptadas de acuerdo con la legislación anterior continuarán vigentes hasta que se produzca la revisión prevista en la disposición transitoria quinta. Hasta ese momento, los curadores de los declarados pródigos continuarán ejerciendo sus cargos de conformidad con la legislación anterior.

⁷ Disposición transitoria quinta. Revisión de las medidas ya acordadas.:

Las personas con capacidad modificada judicialmente, los declarados pródigos, los progenitores que ostenten la patria potestad prorrogada o rehabilitada, los tutores, los curadores, los defensores judiciales y los apoderados preventivos podrán solicitar en cualquier momento de la autoridad judicial la revisión de las medidas que se hubiesen establecido con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, para adaptarlas a esta. La revisión de las medidas deberá producirse en el plazo máximo de un año desde dicha solicitud.

Para aquellos casos donde no haya existido la solicitud mencionada en el párrafo anterior, la revisión se realizará por parte de la autoridad judicial de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal en un plazo máximo de tres años.

(...) Para aquellos casos donde no haya existido la solicitud mencionada en el párrafo anterior, la revisión se realizará por parte de la autoridad judicial de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal en un plazo máximo de tres años.

En consecuencia, expuestos estos datos legislativos, nos encontramos claramente con que la ley determina la revisión de las medidas adoptadas con la vigencia de la Ley en el plazo de tres años (o excepcionalmente de seis años) —según hemos expuesto en el art 268— y por ello para las resoluciones dictadas con anterioridad a esta Ley la Disposición Transitoria 2, remite a la Disposición Transitoria 5, la cual he indicado y reproduzco de nuevo: (...) *Para aquellos casos donde no haya existido la solicitud mencionada en el párrafo anterior, la revisión se realizará por parte de la autoridad judicial de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal en un plazo máximo de tres años (...).*

En consecuencia, entiendo claramente que el tenor literal de la Ley determina que deberán realizarse las revisiones de las resoluciones anteriores en este plazo y por tanto septiembre de 2024.

En las tramitaciones realizadas en los tribunales de la Comunidad Autónoma de Aragón, como he expuesto —en general— se mantiene la aplicación del CDFA si bien con las adaptaciones del CC, ello por tanto deberá suponer que procederán las revisiones de las resoluciones en el plazo indicado de tres años, pero no parece probable que este plazo pueda cumplirse dada la sobrecarga de expedientes que existe y la falta de medios de la administración, por lo que estimo que nos encontremos con un retraso en la aplicación de esta disposición.

Dado que los tribunales siempre han protegido el interés del discapacitado —como interés superior— es de estimar que el retraso en la revisión no va a afectar el interés de los mismos en cuanto a que ostente las medidas más convenientes y necesarias para la adecuada protección del discapaz y su patrimonio.

